

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por LUZ MARINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ contra la GROUPE SEB COLOMBIA S.A. (Radicado 05001-31-05-020-2018-00450-03).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A., a la abogada MARÍA NELLY MARIACA MARTÍNEZ, con tarjeta profesional No. 394.439 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se condene a la sociedad demandada a reconocerle y pagarle la sustitución de la pensión de jubilación que venía percibiendo su compañero permanente Rafael Antonio Montoya Velásquez, a partir del 23 de junio de 1986 cuando ocurrió la muerte, junto con el retroactivo adeudado y los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Al efecto, relató que Rafael Antonio Montoya Velásquez laboró para Industrias Metalúrgicas Unidas S.A. - Imusa - desde el 13 de enero de 1935 hasta el 15 de enero de 1968, fecha en la que se retiró para disfrutar de su pensión de

jubilación. Convivieron como pareja de forma ininterrumpida entre el 19 de marzo de 1981 y el fallecimiento, ocurrido el 23 de junio de 1986. Que en su calidad de compañera permanente acudió al reconocimiento de la sustitución pensional recibiendo en varias oportunidades respuesta negativa aduciendo que bajo la normativa aplicable no era posible dar reconocimiento de lo pedido a las compañeras permanentes ante la muerte de un pensionado.

GROUPE SEB COLOMBIA S.A se pronunció dentro del término legal aceptando el vínculo enunciado y sus extremos temporales, la pensión de jubilación otorgada al fallecido y las peticiones elevadas por la demandante para obtener la sustitución pensional. Afirmó no constarle los restantes fundamentos fácticos, presentando oposición a lo pretendido en tanto a su juicio no se cumplen con los soportes fácticos e idóneos para dar razón a los pedimentos, estando la negativa de la prestación encuadrada en los parámetros de ley. Como excepciones de fondo formuló las que denominó prescripción, inexistencia del derecho de sustitución pensional en cabeza de la señora Hernández Hernández, improcedencia de invocar frente al caso de marras, pronunciamientos de la Corte Constitucional, ausencia de requisitos que acrediten la calidad de compañera permanente de la demandante e improcedencia de condena por intereses moratorios.

Surtido el trámite de rigor, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín emitió sentencia el 21 de octubre de 2022 DECLARÓ que la demandante no reúne los presupuestos legales para acceder a la pensión de sobrevivientes solicitada. ABSOLVIÓ a la demandada de todas las pretensiones de la demanda. CONDENÓ en costas a la demandante, fijando las agencias en derecho en la suma equivalente a 2 SMLMV.

La representante judicial de la demandante se apartó de lo decidido, argumentando que en virtud al reconocimiento de la pensión de jubilación a Rafael Antonio Montoya, no queda duda que la prestación por muerte estaría a cargo de la empresa demandada, sin que sea necesario determinar si su origen es legal o convencional. Señaló que conforme a la fecha de la muerte, se debía demostrar una convivencia de por lo menos tres (3) años, los que la demandante superó, quedando debidamente demostrado con el dicho de las

declarantes que entre la pareja se presentó una convivencia por un término de seis (6) años, prueba que solicita sea analizada nuevamente con consideración del lapso que ha transcurrido, pues no comparte la desacreditación de la misma, porque dada la cercanía, son precisamente los conocedores del tiempo, modo y lugar de esa condición, a partir de donde pide la revocatoria de la decisión para en su lugar, ser ordenado el reconocimiento de la prestación buscada (Min 1:41:12).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que Rafael Antonio Montoya Velásquez laboró al servicio de Industrias Metalúrgicas Unidas S.A -Imusa- entre el 13 de enero de 1935 y el 15 de enero de 1968 (Pág. 22 Archivo 01), con ingreso al Instituto de Seguros Sociales a partir del 15 de enero de 1968, desde cuando se retiró para disfrutar de una pensión de jubilación, previa solicitud realizada el 17 de octubre de 1967 (Pág. 19 Archivo 11), la que fue reajustada por medio de comunicación del 06 de abril de 1971 (Pág. 23 Archivo 11). El 23 de junio de 1986 el pensionado falleció (Págs. 18 y 20 Archivo 01), desde cuando la demandante elevó varias reclamaciones para obtener la sustitución pensional (Págs. 24-25 y 29-31 Archivo 01), recibiendo respuesta negativa por no encontrarse para la data del óbito vigente la normatividad que otorgaba ese derecho a las compañeras permanentes (Págs. 26-27, 32-33 Archivo 01).

En razón de ello, la cuestión a dilucidar en esta instancia recae en determinar la posibilidad de otorgar a la promotora del juicio la sustitución de la pensión de jubilación que en vida disfrutó su compañero permanente Rafael Antonio Montoya Velásquez.

Para dar inicio al análisis respectivo en virtud a los argumentos del recurso, es preciso señalar que contrario a lo que advertido por la falladora de instancia en

su decisión, para esta Sala de Decisión si es posible dilucidar la fuente que dio origen a la pensión de jubilación que el causante percibió a partir del 15 de enero de 1968, pues si bien no se cuenta con el acto administrativo, acuerdo, pacto o comunicación que contenga tal reconocimiento, desde la solicitud efectuada el 17 de octubre de 1967 se desprende el ánimo de acceder a la prestación legal establecida en el Código Sustantivo del Trabajo (Pág. 19 Archivo 11), a partir de donde la empleadora por intermedio de su jefe de personal y a través de correspondencia interna del 20 de octubre de 1967 hizo remisión de esa solicitud para impartir su concesión y liquidación (Pág. 10 Archivo 11), sumado a que para el 06 de abril de 1971 se dispuso un reajuste desde una normatividad reciente no anunciada (Pág. 23 Archivo 11), eventos de donde es posible desprender que la pensión de jubilación del señor Montoya provino del ánimo del legislador según lo establecido en el artículo 260 del CST que imponía al dador del empleo esta prestación, y no a un compendio convencional, lo que traduce en innecesario contar con la constancia de su contenido para impartir el estudio presente, pues los términos de esa pensión están estipulados en la ley, además que no es discutida su transmisibilidad, de manera que la misma estaba sujeta al régimen de sustitución pensional.

Dilucidado lo anterior, se tiene que con miras a dar resolución a la pensión de sobrevivientes que se pretende, es claro que la normatividad aplicable acorde a la teoría del hecho causante es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el deceso de Rafael Antonio Montoya el 23 de junio de 1986, debe aplicarse lo que dispone el artículo 1° de la Ley 33 de 1973 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala: *“Fallecido un trabajador particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia”*.

Al respecto, ha sido criterio de la Alta Corporación pese a la lectura exegética de la disposición reguladora del asunto por virtud de su vigencia para la data del deceso, que en vigencia de la Ley 33 de 1973 y de la Ley 12 de 1975 es

dable que la compañera permanente pueda aspirar válidamente a obtener la sustitución de la pensión que en vida gozaba el causante, puesto que siguiendo la pauta jurisprudencial, el derecho de la compañera permanente en el marco de esa normativa se amplió y se equiparó al de la viuda, por no encontrar fundamento válido ni lógico para dar un trato diferenciado y discriminatorio, dando igual oportunidad de sustituir el derecho pensional a la compañera permanente, tanto en el evento en que se fallece teniendo el tiempo de servicio mínimo requerido para acceder al derecho pero sin cumplir la edad, y con mayor razón cuando se trate de un pensionado, prestación a la que podía acceder cuando cumplierse los requisitos del precepto 55 de la Ley 90 de 1946 (Ver SL1131-2015 y SL3402-2019).

En ese orden, la demandante predicando su calidad de compañera permanente respecto del causante, tenía como carga procesal demostrar que con el pensionado hizo vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte o procrearon hijos.

Para ese efecto, la demandante trajo como testigos a NUBIA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y ROSA EMILIA TAMAYO, hermana y amiga de la infancia respectivamente, las que señalaron que la pareja duró 2 meses de novios, y desde marzo de 1981 iniciaron una convivencia como pareja, siendo Rafael Antonio Montoya primo lejano de su madre, fecha para la que ella contaba con 27 años y él con 62, el que murió del corazón para 1986 cuando aún era compañero con Luz Marina. La señora Hernández aseveró que la pareja vivió en igual residencia en la que estaba domiciliada con sus padres y que era de propiedad del patrón de su papá, porque era peón de una de sus fincas, lugar donde tenían adecuado un espacio solos, pero quedaban contiguos. Señaló que no hablaba mucho con Rafael porque no se llevaban bien y que sabía que vivían juntos porque la hermana pasaba a saludarlos y les decía, los que se veían acompañados para ir a misa. Supo que el señor Rafael era viudo y conoció a dos de sus hijos - Eduardo y Teresita- los que vivían a cuadra y media de su vivienda, además que iban a la misma iglesia. Informó que no acudió a las exequias porque se quedó cuidando a sus padres ancianos y enfermos y que no conoció a otro familiar del fallecido, enfatizando en que las familias no tuvieron oposición para el desarrollo de esa relación.

Rosa Emilia Tamayo, indicó que iba a visitar a la pareja cada 15, 20 día o un mes porque era muy amiga de Luz Marina, y que era una casa donde residían sus padres y hermana, pero que contaba junto con Rafael con un lugar independiente, suceso de convivencia que no se interrumpió y que conoció por voces de la demandante cuando acudió a visitarla y allí ya estaba él, señalando que su familia lo aceptó en esta casa y que no tenían problema con la diferencia de edad; no conoció a ningún familiar de Rafael, quien estaba enfermo desde antes de conocer a Luz Marina, y ya se encontraba pensionado, habiéndole comentado su amiga que se conocieron en el convento las Clarisas y que durante la convivencia lo visitaban dos de sus hijos. No asistió a las exequias porque se encontraba laborando.

Lo que tienden a demostrar los vestigios recaudados bajo un análisis conjunto en la delimitación de la sana crítica, es que la convivencia alegada por las reclamantes en los términos de la ley no se da por demostrada en la forma debida y, de hecho, para esta Sala de Decisión esa condición de compañera permanente no debe darse por demostrada.

Es verdad que las deponentes dieron plena claridad de las fechas desde que inició la convivencia que se predica desde el escrito de demanda, pero es que se derruye la certeza de ese acontecimiento en razón a que no es posible desprender de los dichos escuchados, que se presentara una convivencia en el marco conceptual que se ubica el legislador para dar otorgamiento a esta prerrogativa de la seguridad social, pues esa exigencia debe darse bajo el entendimiento de una *“comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”* (Ver SL3813-2020 y SL5540-2021 que traen a colación la SL1399-2018).

Lo que revela la testimonial es que Rafael Antonio Montoya y Luz Marina Hernández vivían bajo el mismo techo y Luz Marina lo acompañaba a sus citas médicas y a ritos religiosos, pero de allí a dar por sentado que tenían

conformada una unión marital de hecho con intención permanente y estable de conformarse como familia es una situación que no logra demostrarse con suficiencia. Y es que se reflejan varias inconsistencias que no es posible pasarlas por alto, y que restan convicción a esa unión que hoy pretende sea reconocida.

Por un lado, las deponentes no dan discurso lógico sobre el recuerdo exacto de la fecha en que la pareja decidió compartir techo. Nubia Hernández, presentó varias inconsistencias en su relato de cara a lo que su hermana dio a conocer en el interrogatorio de parte, peticionando al respecto la apoderada recurrente consideración al tiempo transcurrido para justificarlas, resultando curioso que ese dato si fuera entregado con semejante precisión; y Rosa Emilia Tamayo revela incluso el día - *19 de marzo de 1981*- atribuyendo la evocación a la fecha de cumpleaños de una amiga de su gran aprecio, cuando es una festividad que se celebra año a año, y al mismo tiempo comunicó que se percató de esa convivencia cuando algún día llegó a visitar a la demandante y encontró al señor Rafael allí, lo que denota que por conocimiento directo no pudo verificar el momento en que el señor Montoya trasladó su domicilio al de Luz Marina Hernández y su familia y por tanto, esa estrictez en la fecha proviene de la misma demandante, al afirmarse que fue quien le comentó sobre tal hecho.

También se disminuye la credibilidad frente a la condición de compañera permanente que aduce la demandante perduró por más de 6 años, pues no se suministra información más allá de la cohabitación sin claridad del contexto, pues no debe ignorarse que se trataba de una persona de 62 años de edad, pensionada y con avance en una patología cardíaca, por lo que los medios demostrativos debieron ser más exigentes para convencer que la intención era dar inicio a un proyecto de vida con la demandante, sin que sea posible echarse de menos los siguientes aspectos relucidos en este escenario jurídico: 1) Solo eran vistos públicamente cuando acudían a misa; 2) La demandante desconocía los asuntos familiares y personales como la existencia y nombre de sus hijos, de quien aduce fue su compañero de vida por 6 años, lo que por demás se contrapone al dicho de su hermana Nubia, cuando informó que Rafael era primo lejano y su familia vivía a una cuadra y media de la suya; 3)

El grupo familiar de la accionante aun coexistiendo en igual domicilio, sabía de la permanencia del vínculo por dicho de ella misma sin advertir ni anunciar la comprobación directa de ese hecho a partir de indicios claros que denotaran una vida en común desde el afecto, el respeto y la ayuda mutua; 4) La señora Hernández se refiere en su interrogatorio a quien fue su pareja como “*Don Rafael*”; 5) Quien figuraba como su mejor amiga - *Rosa Emilia Tamayo* - fue excluida de enterarse del momento en que decidieron vivir juntos, lo que conoció por comentarios de su amiga al acudir a su visita y percatarse de la presencia del señor Montoya sin dar cuenta de las circunstancias que la llevan a corroborar la condición de compañeros; 6) Para el momento de la muerte que ocurrió un lunes en la madrugada, el señor Rafael se encontraba solo desde el día sábado pese al apremiante estado de salud en el que se encontraba, con consideración de la corta edad de Luz Marina que no permite inferir alguna imposibilidad de su parte para su acompañamiento; 7) En las exequias ningún familiar ni amistad dio su acompañamiento a la demandante, ni era reconocida por los asistentes como la enlutada.

Es a partir de lo previo que no se presentan las pautas demostrativas necesarias y suficientes para afirmar con certeza que con Luz Marina Hernández la convivencia que se busca demostrar se presentó, pues esa posibilidad ha quedado derrumbada con las discordancias previamente divulgadas, no contándose con otros medios de evidencia que permitan colegir que con la demandante y el fallecido se sostuvo siquiera una relación sentimental, por lo que mucho menos, puede advertirse que se presentó una convivencia en su ámbito formal y permanente dentro del mínimo dispuesto por el legislador, pues para los efectos que se atienden, la prueba debió ser de una rigurosidad tal que no quede la menor duda de lo concluido, no existiendo solidez frente a que el nexo existió y que además de presentarse una cohabitación, se compartía lecho y mesa, donde además de no resultar concordantes las declaraciones con el interrogatorio de parte rendido por la demandante, se muestran al mismo tiempo ambiguas y contradictorias entre sí en cuanto a las condiciones de modo y lugar en las que tal comunidad de vida pudo ejecutarse, resultando dudoso y cuestionable la exactitud con la que se informan las fechas de inicio de la relación como pareja, en contraposición con la vaguedad de los demás hechos trascendentales que rodearon esa

situación, lo que no permite dar el alcance necesario a la testimonial para construir una historia consistente y creíble de la pareja y patentizar un conocimiento directo y pleno de que lo que se presentó entre Luz Marina y Rafael Antonio fue un vínculo con vocación de permanencia con prevalencia del deber de asistencia y acompañamiento, puesto que la cohabitación acreditada en esta oportunidad no conlleva a predicar la acreditación de la exigencia legal para ser beneficiaria la demandante de la prestación por muerte que pretende, ni impulsa a la observancia certera de ese enlace sentimental, estándose claramente frente a una singular situación que debe ser evaluada bajo los aspectos particulares y circunstanciales, pero que en este plano judicial no fue debidamente dilucidada, quedando cortas las probanzas para demostrar una convivencia real y efectiva, con imposibilidad de la judicatura para decretar sin lugar a vacilaciones que la demandante fungió como compañera permanente del pensionado fallecido para prodigar el amparo que la ley otorga ante la desaparición física del ser querido.

En virtud de lo dicho, la demandante se releva del derecho a concurrir en su calidad de compañera permanente como beneficiaria de la prestación por muerte, lo que implica que la providencia atacada sea confirmada en su integridad.

Las costas en esta instancia estarán a cargo de la demandante, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$250.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en apelación de fecha y procedencia conocidas. Las costas son como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
(Sin firma por ausencia justificada)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310502020180045003
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	LUZ MARINA HERNANDEZ HERNANDEZ
Demandado:	GROUPE SEB COLOMBIA S.A.
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	10/10/2023
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 11/10/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario